Pacheco, Ossiell y Castro, Marlen, "No se usará la fuerza pública contra ejidatarios de Carrizalillo: Chavarría", *La Jornada Guerrero*, Guerrero, 6 de febrero, 2007.

Dirección electrónica:

<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/02/06/index.php?section=sociedad&article=006n1soc>

Aunque el corporativo minero Luismin esté valorando su permanencia en Guerrero, el gobierno del estado no usará la fuerza pública para desalojar a los ejidatarios y trabajadores de Carrizalillo que mantienen bloqueado el acceso a la mina Los Filos desde hace casi un mes, aseguró el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.

Sin embargo, contra los campesinos y trabajadores de la compañía que desde el pasado 8 de enero bloquean el acceso a la que será supuestamente la mina más importante de América, ya se utilizó la fuerza policíaca cuando en dos ocasiones: el jueves 25 de enero fueron desalojados, aunque horas más tarde retomaron el sitio y el bloqueo, al obtener refuerzos de parte de gente de la misma comunidad que había permanecido indiferente.

Los ejidatarios demandan un nuevo contrato por la ocupación de 700 hectáreas y el cumplimiento a obras sociales que prometió el corporativo trasnacional.

Chavarría Barrera fue entrevistado en el palacio de gobierno, al finalizar el acto conmemorativo a la promulgación de la Constitución Política, por el cual se izó la bandera en la explanada de las oficinas de gobierno.

Ayer lunes, funcionarios del gobierno del estado acudirían a Carrizalillo para participar en una reunión con los dos grupos de ejidatarios, divididos en torno a la forma de enfrentar el incumplimiento de Luismin, la que se transfirió para hoy con el propósito de dar lugar a que ambas expresiones acuerden una acción conjunta, expuso Chavarría Barrera.

Los integrantes del comisariado ejidal, encabezado por Fernando Peña Celso, se oponen al bloqueo que impulsó un grupo de ejidatarios liderados por Crisóforo Guzmán Montiel, quienes formaron el Comité de Solidaridad en Defensa de las Tierras de Carrizalillo y se instalaron en plantón para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Dijo Chavarría que el comisariado ejidal propuso que la reunión de ayer lunes se celebrara hoy, puesto que ayer tendría lugar una asamblea interna en el ejido.

Aseguró que el gobierno promueve conciliación entre las dos expresiones de ejidatarios en Carrizalillo para que promuevan ante el Tribunal Unitario Agrario la revisión de los convenios de ocupación celebrados entre el ejido y la empresa y sea esa instancia la que resuelva el problema.

Insistió en que pese a que la empresa dio a conocer que está valorando su permanencia en Guerrero, el gobierno no desalojará a los ejidatarios, pues está promoviendo el diálogo para que el conflicto se solucione de manera pacífica.

Critica Brito postura oficial

El diputado federal perredista Modesto Brito González dijo que en el conflicto generado por la empresa Luismin, el gobierno de Zeferino Torreblanca demuestra tener más compromiso con las transnacionales y empresarios que con el pueblo de Guerrero, pues la inconformidad de ejidatarios de Carrizalillo es derivada del incumplimiento de la minera a acuerdos pactados de dotar de obras a las comunidades.

Brito informó que realizó un recorrido por Carrizalillo y los predios donde están las minas Los Filos y constató “el gran desastre ecológico”, además de la segregación y pobreza de los pobladores, que reclaman a la minera el cumplimiento de las obras pactadas, como agua potable, pavimentación de calles y una clínica.

“Te sorprendes al ver cómo las minas están siendo sobrexplotadas a cielo abierto a un costo relativamente bajo, y la voracidad de la empresa para no reconocer en lo más mínimo lo que corresponde como personas a los dueños de las tierras donde se está asentando”, dijo el legislador.

Opinó que este conflicto, como otros ocurridos en el sector minero del país, son muestra de cómo los ejidatarios se organizan para luchar contra el saqueo minero.

Consideró hay “una grave irresponsabilidad” del gobierno del estado, en particular de Zeferino Torreblanca y del secretario de Desarrollo Económico, Jorge Peña Soberanis, quien con sus declaraciones en defensa de la inversión de la empresa Luismin “se pone

totalmente del lado de los saqueadores, cuando deberían garantizar mejores condiciones de vida y humanas en esa región”.

Lamentó que en nombre del progreso se cometan estos latrocinios, porque se trata de progreso sólo para los dueños de las empresas trasnacionales que saquean la riqueza minera del país, “no para el estado ni para los pobladores y ejidatarios dueños por siglos de esos terrenos”.

Criticó al gobernador porque evidencia, en éste y el proyecto de La Parota, tener más compromiso con las empresas trasnacionales que con el pueblo de Guerrero, y por ende su inclinación al neoliberalismo. “Lamento que suceda esto porque el estado necesita un trato diferente, por eso votamos por un partido diferente”, dijo.

Recordó que en diciembre pasado presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para crear la comisión de asuntos mineros, desaparecida en 1996, porque “los gobiernos han hecho alianza con grupos empresariales y no conviene a los consorcios que explotan las minas”.

Admitió que hay riesgo de que esta iniciativa no sea aprobada porque diputados del PAN y algunos del PRI “están en defensa de las empresas transnacionales y a favor de las políticas de libre mercado”.